

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por el Lic. José María de Manero y Embides, apoderado del C. Narciso Argüelles, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Narciso Argüelles, por medio de su apoderado el C. Lic. José María de Manero y Embides, solicita del Juzgado amparo y proteccion, contra una Orden librada por el C. Gefe político del Canton de Acayucan, relativa á que se destruya la cerca que tenía el quejoso establecida en sus terrenos llamados de Tachicon, en el punto de Dos Bocas, para seguridad de sus siembras y plantios de caña, cuya Orden fué notificada por el C. Presidente de la Municipalidad del pueblo de San Juan Evangelista, y ejecutada en seguida con violacion de las garantías que le conceden los artículos 4º, 13 y 16 de la Constitucion federal, segun expresa en su ocurso.

El Juzgado ha corrido los trámites regulares de este juicio, para averiguar los hechos en que se apoya la queja; se ha recibido á prueba, y se ha mandado que las partes aleguen lo que tengan por conveniente; y como de las constancias de autos resulta, que se han justificado esos hechos y que por lo tanto han sido violadas las garantías que ha señalado el quejoso, por no ser competente la Gefatura política para resolver en el asunto de que se trata, sino la autoridad judicial con audiencia de las partes y en la forma y términos que previene el Código de procedimientos civiles del Estado, con la circunstancia de que la Orden librada y ejecutada, ha causado perjuicios de grave consideracion al C. Argüelles, en sus intereses y posesiones, pide á V. que se sirva ampararlo y protegerlo, con arreglo á

las disposiciones legales que cita, y á los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, y ley orgánica de 20 de Enero de 1869.

H. Veracruz, Abril 23 de 1873.—Lic. J. M. Lopez de Escalera.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Heróica Veracruz, Abril 29 de 1873.—Visto este juicio sobre proteccion y amparo que ha solicitado D. Narciso Argüelles por medio de su apoderado el C. Lic. José María de Manero y Embides, contra una Orden librada por el C. Gefe político del Canton de Acayucan, para que se destruyesen las cercas que tenía en sus terrenos titulados de Tachicon el citado Argüelles, en el punto de Dos Bocas, á fin de que sus sementeras quedasen á cubierto del daño que pudiera causarles el ganado, cuya Orden fué notificada por el C. Presidente Municipal del pueblo de San Juan Evangelista, con violacion de las garantías que conceden al hombre los artículos 4º, 13 y 16 de la Constitucion federal, segun expresa el quejoso, en virtud de haberse ejecutado dicha Orden. Visto así mismo el informe producido por el expresado C. Presidente, en que manifiesta ser cierta y á la vez acompaña copia certificada de ella, pero que no fué el ejecutor, sino que se limitó á notificarla al C. Argüelles; la prueba producida en este juicio, de la cual resulta: que fué ejecutada la mencionada Orden y avaluado el daño recibido por el interesado; los documentos que se acompañaron al ocurso, y lo pedido por el C. Promotor fiscal.

Considerando: que está justificada la propiedad y posesion en que se halla de los terrenos indicados el referido C. Argüelles, y los demas hechos en que se funda su queja.

Que el C. Gefe político de Acayucan, no es autoridad competente para conocer de los negocios civiles en que á consecuencia de las controversias suscitadas por particulares deba dictarse alguna resolucion judi-

cial, como indudablemente es la que motivó la orden librada para la destrucción de las cercas, promovida por los que se titulan dueños del terreno denominado "San Felipe de Jesús."

Que tanto la mencionada orden como su ejecución, son actos que corresponden á la jurisdicción de los Jueces del Estado, y que por otra parte han privado de sus posesiones al quejoso, causándole graves perjuicios sin que se hubiesen observado los trámites y formalidades de un juicio previo, como dispone el Código de procedimientos vigente en este Estado.

Que por lo mismo, han sido violadas en la persona é intereses del mismo Argüelles, las garantías que señala en su escrito de queja y alegato de buena prueba; y en atención á lo prevenido en los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, y ley orgánica y de procedimientos de 20 de Enero de 1869, se falla. Primero: la Justicia federal ampara y protege al C. Narciso Argüelles, contra la orden que libró la Gefatura política de Acayucan, para que fuesen destruidas las cercas que tenía establecidas en sus terrenos de Tachicon en el punto de Dos Bocas el citado Argüelles, y que fué ejecutada con perjuicio de sus intereses. Segundo: notifíquese este fallo; sáquense las copias prevenidas por la ley para su publicación en el Progreso y en el Semanario Judicial de la Federación, y elévense los autos originales á la Suprema Corte de Justicia, para la correspondiente revisión.

Así lo mandó y firmó el C. Juez de Distrito del Estado: lo testificamos.—*Lic. Luis I. Gomez.*—*José María Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 14 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por el Lic. Jo-

sé María de Manero y Embides, apoderado del C. Narciso Argüelles, contra una orden librada por el C. Gefe político del Canton de Acayucan, para que se derribasen las cercas que tenía el quejoso en sus terrenos llamados de Tachicon en el punto de Dos Bocas, alegando: que dicha orden viola las garantías otorgadas por los artículos 13 y 16 de la Constitución federal de la República; vistas las constancias de autos, y resultando de ellas: que la autoridad contra quien se solicita el presente recurso, conoció de ese negocio sometido á la jurisdicción de los Tribunales, decidiendo gubernativamente un derecho que no está sometido á la autoridad política, sus providencias importan una violación expresa de las garantías aducidas por el peticionario en su escrito de queja; con tales fundamentos, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Veracruz, cuya parte resolutive es como sigue: "La Justicia federal ampara y protege al C. Narciso Argüelles, contra la orden que libró la Gefatura política de Acayucan, para que fuesen destruidas las cercas que tenía establecidas en sus terrenos de Tachicon en el punto de Dos Bocas el citado Argüelles, y que fué ejecutada con perjuicio de sus intereses."

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzmán.*—*L. Velasco.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Setiem-

bre 10 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por los Señores Goldsmhids y Gavica, contra el cobro que les hace la Tesorería del Ayuntamiento de Mazatlan, por el impuesto municipal denominado derecho de piso.

FEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que habiendo examinado las pruebas rendidas por la parte de los Señores Goldsmhids y Gavica, en el juicio de amparo que han promovido contra la Tesorería Municipal de esta ciudad que les exige el pago del derecho de piso de mar, por efectos introducidos como de tránsito, encuentra: que en su concepto, los Señores interesados han probado bastante que los tercios de azúcar y barriles de aguardiente sobre que versa la cuestión, han venido á este puerto guiados como de tránsito; y que por consiguiente, no deben causar por ello el derecho que se les exige, conforme á las disposiciones de la ley general de 1º de Mayo de 1868.

Por lo expuesto, el fiscal concluye su pedimento que tenia suspendido, hasta examinar las pruebas, suplicando al Juzgado se sirva declarar: que la Justicia de la Unión ampara y protege á los Señores Goldsmhids y Gavica, contra el cobro indebido que les hace la Tesorería Municipal, por los efectos de tránsito que introdujeron. Mazatlan, Setiembre 17 de 1873.—*L. Gaona*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mazatlan, Setiembre 21 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por los

Señores Goldsmhids y Gavica de este comercio, contra las providencias de la Tesorería Municipal, que les exige por medio de la facultad económico-coactiva, el pago del derecho de piso de mar, por los efectos que bajo su consignación han estado en este puerto, cuya disposición según los quejosos, viola la garantía que les otorga el artículo 16 de la Constitución general de la República, por que se les hace el cobro de un impuesto que no se ha decretado por autoridad competente, fundando su queja en las fracciones 1ª y 3ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869. Visto el informe de la autoridad ejecutora, en el que asegura que el cobro que hace á los Señores Goldsmhids y Gavica, no es por mercancías que hayan tocado de simple tránsito, sino por efectos que fueron consignados á esta plaza y consumidos en ella. Que los municipios del Estado están facultados por la Constitución del mismo, para decretar los arbitrios que sean necesarios para cubrir sus gastos, y que en virtud de esa facultad, cobra á los mencionados Señores, la cantidad de quinientos diez y seis pesos cincuenta y dos centavos, que han causado los efectos que les han sido consignados; que el expresado cobro no es contrario á la Constitución ni á la ley de 1º de Mayo de 1868, por que no se hace en virtud de lo dispuesto en el artículo 5º de las ordenanzas municipales, cuyo artículo fué modificado, suprimiendo en él la palabra "tránsito," para que no estuviera en oposición con la ley antes citada, sino por el consumo de las relacionadas mercancías, las que si hubieran pasado de tránsito, no se habría vendido una parte como lo aseguran los quejosos, sino que hubieran caminado íntegras con sus documentos, hasta su final destino; y por último: que la ley de 1º de Mayo de 1868, se refiere al comercio de Estado á Estado, y no al de municipio á municipio, para cuyo arreglo no está facultado el Congreso de la Unión, perteneciendo exclusivamente esta facultad al Gobierno del Estado, por cuyas